

**Proceso selectivo extraordinario de
estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, para el ingreso en el cuerpo
superior de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1.**

Primer ejercicio

Acceso: libre

Idioma: castellano

**NO abra el examen hasta que el tribunal se lo
indique**

PRIMERA PARTE

1.- De acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y se acomoda a la literalidad del precepto constitucional:

- a) Los poderes públicos promoverán el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
- b) La ley promoverá el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
- c) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
- d) La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

2.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser convocado:

- a) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la disolución de las Cortes Generales.
- c) Dentro de los cinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
- d) Entre los treinta y los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.

3.- Según el artículo 91 de la Constitución Española, el Rey:

- a) Sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por el Congreso, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- b) Sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por el Congreso, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- c) Sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- d) Sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

4.- De conformidad con la Constitución Española, se regularán por ley orgánica:

- a) Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
- b) Cualquier alteración de los límites provinciales.
- c) El déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.
- d) Todas son correctas.

5.- Conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale cuál es el plazo para formular el recurso de inconstitucionalidad contra una Ley:

- a) Tres meses, a partir de su publicación.
- b) Seis meses, a partir de su notificación.
- c) Seis meses, a partir de su publicación.
- d) El recurso de inconstitucionalidad podrá interponerse en cualquier momento, no está sujeto a plazo.

6.- Según el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/1979, de 27 de noviembre, del Tribunal Constitucional, los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan:

- a) Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo. El cese se decretará por el Presidente.
- b) Por renuncia, aceptada por el Presidente del Tribunal.
- c) Por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial. El cese se decretará por el Presidente.
- d) La incompatibilidad sobrevenida no es causa de cese.

7.- Según el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 27 de noviembre, del Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad:

- a) Contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial.
- b) Contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su aprobación.
- c) Contra las Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial. No son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad los actos con fuerza de ley.
- d) Contra las Leyes podrá promoverse a partir de su aprobación. No son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad las disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

8.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley orgánica 2/1979, del 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, los Magistrados del Tribunal que hubieran desempeñado el cargo:

- a) Durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por seis meses equivalente a la que percibieran en el momento del cese.
- b) Durante un mínimo de cinco años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año equivalente a la que percibieran en el momento del cese.
- c) Durante un mínimo de cinco años tendrán derecho a una remuneración de transición por seis meses equivalente a la que percibieran en el momento del cese.
- d) Durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año equivalente a la que percibieran en el momento del cese.

9.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios la presidirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 50/1997, del 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno:

- a) El Presidente del Gobierno o, en su defecto el Ministro de la Presidencia.
- b) Un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto el Ministro de la Presidencia.
- c) El Presidente del Gobierno o, en su defecto un Vicepresidente.
- d) Un Vicepresidente o, en su defecto el Secretario de Estado del Ministerio de la Presidencia.

10.- Según el artículo 29 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno:

- a) La actuación del Gobierno es impugnables ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
- b) La actuación del Gobierno no es impugnables ante el Tribunal Constitucional.
- c) Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
- d) Los actos, y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No es impugnables ante esta jurisdicción la inactividad de la Administración.

11.- Según el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, los Gabinetes:

- a) Se regularán por Real Decreto del Gobierno.
- b) Se regularán por Real Decreto del Presidente.
- c) Se regularán por lo dispuesto en esta ley. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente, en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones.
- d) Tendrán nivel orgánico de Secretario de Estado.

12.- Según el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, los acuerdos adoptados en las Comisiones Delegadas del Gobierno revisten la forma de:

- a) Reales Decretos.
- b) Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.
- c) Reales Decretos, cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos.
- d) Decretos.

13.- Conforme al artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Galicia, son funciones del Parlamento de Galicia:

- a) Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional.
- b) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de ley.
- c) Exigir, en su caso, responsabilidad política a la Junta y a su Presidente.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

14.- Señale cuál de las siguientes no es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia:

- a) Organización de sus instituciones de autogobierno.
- b) Conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil gallego.
- c) Salvamento marítimo.
- d) Instituciones de crédito corporativo.

15.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 del Estatuto de autonomía de Galicia, indique a quien le corresponde elaborar las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales cedidos de acuerdo con los términos de dicha cesión:

- a) Al Conselleiro de Facenda y Administración pública.
- b) Al Parlamento de Galicia
- c) A la Xunta de Galicia
- d) Al Ministerio de Hacienda y Administración pública.

16.- Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nombrado:

- a) Por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- c) Por Decreto del Presidente de la Xunta de Galicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- d) Por el Presidente del Tribunal Supremo a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

17.- Conforme al artículo 37.1. de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, y en atención a la remisión que dicho artículo efectúa a otros preceptos del mismo texto legal, adoptarán la forma de Decreto:

- a) El acuerdo para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad.
- b) La disolución del Parlamento.
- c) La aprobación y posterior remisión al Parlamento de los proyectos de convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
- d) La resolución de recursos en vía administrativa.

18.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, las expresidentas y expresidentes tendrán derecho a percibir:

- a) Durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia
- b) Durante cuatro años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia.
- c) Durante un año desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia.
- d) Durante tres años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia.

19.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, si el Parlamento otorga su confianza al candidato (a la Presidencia de la Xunta), el Presidente (del Parlamento) lo comunicará al Rey para su nombramiento, que se hará:

- a) Mediante Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Mediante Real Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.
- c) Mediante Decreto que se publicará en el Diario Oficial de Galicia.
- d) Mediante Decreto legislativo que se publicará en el Diario Oficial de Galicia.

20.- Según la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de la Xunta y de su Presidencia, otorgar o denegar su conformidad a la tramitación de proposiciones de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, corresponde:

- a) Al Presidente de la Xunta de Galicia.
- b) A la Xunta.
- c) A los vicepresidentes, si los hubiere, y los conselleiros.
- d) A los conselleiros.

21.- Conforme al artículo 12.2 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, el Decreto de convocatoria señalará la fecha de las elecciones que habrán de tener lugar:

- a) Cincuenta y cuatro días después de la convocatoria.
- b) Entre el quincuagésimo cuarto y el sexagésimo día posterior a la convocatoria.
- c) Entre el quincuagésimo y el sexagésimo día posterior a la convocatoria.
- d) En el plazo máximo de los dos meses posteriores a la convocatoria.

22.- Conforme al artículo 29 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, un partido, federación o coalición que obtuviera representación en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia y alcanzara, por lo menos, un 15% del total de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma, tendrá derecho, durante la campaña electoral, a un tiempo gratuito de propaganda electoral en la TVG de:

- a) Cuarenta y cinco minutos.
- b) Veinte minutos.
- c) Diez minutos.
- d) Treinta minutos.

23.- Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1985, del 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia, el Decreto de convocatoria (de elecciones) se expedirá:

- a) El vigésimo día anterior a la expiración del mandato del Parlamento.
- b) El vigésimo día anterior a la expiración del mandato del Parlamento, excepto en el supuesto de disolución anticipada.
- c) El vigésimo quinto día anterior a la expiración del mandato del Parlamento.
- d) El vigésimo quinto día anterior a la expiración del mandato del Parlamento, excepto en el supuesto de disolución anticipada.

24.- La actividad del Valedor do Pobo, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia:

- a) Se verá interrumpida en los casos en que el Parlamento no se encuentre reunido, fuese disuelto o expire su mandato.
- b) No se verá interrumpida en los casos en que el Parlamento no se encuentre reunido, fuese disuelto o expire su mandato.
- c) Se interrumpirá con la declaración de los estados de excepción o sitio.
- d) Se verá interrumpida en los casos en que el Parlamento fuese disuelto o expire su mandato, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 55 y 116 de la Constitución.

25.- Conforme al artículo 3 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, indique cuál es los siguientes no es un requisito para ser nombrado Valedor do Pobo:

- a) Gozar de la condición política de gallego.
- b) Encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
- c) Estar en posesión de un título universitario de Grado en Derecho, Ciencias Políticas o similar.
- d) Conocer los idiomas oficiales de Galicia.

26.- Según el artículo 2 de la Ley 6/1984, del 5 de junio del Valedor do Pobo de Galicia, la propuesta de candidato a Valedor do Pobo es:

- a) Realizada por la Comisión de Peticiones al Pleno del Parlamento. A estos efectos será suficiente la mayoría simple para la adopción de acuerdos de la Comisión.
- b) Realizada por la Mesa al Pleno del Parlamento. A estos efectos será suficiente la mayoría simple para la adopción de acuerdos de la Comisión.
- c) Realizada por la Comisión de Peticiones al Pleno del Parlamento. A estos efectos será necesaria la mayoría absoluta para la adopción de acuerdos de la Comisión.
- d) Realizada por la Mesa al Pleno del Parlamento. A estos efectos será necesaria la mayoría absoluta para la adopción de acuerdos de la Comisión.

27.- Las quejas que el Valedor do Pobo reciba, referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia de Galicia, deberá dirigirlas, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia:

- a) Al Ministerio Fiscal y al Consejo del Poder Judicial, sin perjuicio de incluirlas en el informe al Parlamento.
- b) Al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, sin perjuicio de incluirlas en el informe al Parlamento.
- c) Al Consejo del Poder Judicial.
- d) Al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo.

28.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia, ante una queja en la que se advierta carencia de fundamento, el Valedor do Pobo:

- a) Podrá rechazar la queja. Su resolución no será susceptible de recurso.
- b) Podrá rechazar la queja. Su resolución será susceptible de recurso.
- c) Rechazará la queja. Su resolución será susceptible de recurso.
- d) No podrá rechazar la queja.

29.- Conforme al artículo 12 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, el Consello dictaminará preceptivamente en los asuntos de responsabilidad patrimonial:

- a) Cuando se trate de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros.
- b) En cualquier caso.
- c) Cuando se trate de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 30.000 euros para la Administración autonómica.
- d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.

30.- Según el artículo 3 de la Ley 3/2014, del 24 de abril del Consello Consultivo de Galicia, las consejeras y consejeros electivos, en número de cinco, serán nombrados por:

- a) El Presidente de la Xunta.
- b) Dos por el Consello de la Xunta y los otros tres por la Mesa del Parlamento.
- c) Tres por el Consello de la Xunta y los otros dos por la Mesa del Parlamento.
- d) El Pleno del Parlamento.

31.- Conforme al artículo 14 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, el Consello de la Xunta podrá encomendar al Consello Consultivo:

- a) La redacción de anteproyectos de reforma del Estatuto de autonomía y cualquier otro anteproyecto o proyecto de disposiciones legales o reglamentarias.
- b) La redacción de anteproyectos legislativos y la elaboración de propuestas legislativas o de reforma estatutaria.
- c) La redacción de los convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.
- d) Los asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional.

32.- Conforme al artículo 24 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, el Consello Consultivo habrá de emitir sus dictámenes e informes en el plazo de:

- a) Dos meses a partir del día siguiente al de recepción de la solicitud. No obstante, cuando en la solicitud se hagan constar motivadamente razones de urgencia, el plazo para emitir el dictamen o informe se reducirá a la mitad, salvo que, excepcionalmente, la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia fije un plazo menor.
- b) Un mes a partir del día siguiente al de recepción de la solicitud. No obstante, cuando en la solicitud se hagan constar motivadamente razones de urgencia, el plazo para emitir el dictamen o informe será de diez días, salvo que, excepcionalmente, la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia fije un plazo menor.
- c) Dos meses a partir del día siguiente al de recepción de la solicitud. No obstante, cuando en la solicitud se hagan constar motivadamente razones de urgencia, el plazo para emitir el dictamen o informe será de un mes.
- d) Un mes a partir del día siguiente al de recepción de la solicitud. No obstante, cuando en la solicitud se hagan constar motivadamente razones de urgencia, el plazo para emitir el dictamen o informe será de quince días, salvo que, excepcionalmente, la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia o el Consello de la Xunta fijen un plazo menor.

33.- Conforme al artículo 10 apartado primero de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.
- b) Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la castellana.
- c) Los topónimos de Galicia tendrán como forma oficial tanto la expresada en lengua gallega como la expresada en lengua castellana.
- d) Los topónimos de Galicia tendrán como forma oficial bien la expresada en lengua gallega o bien la expresada en lengua castellana, según la tradición y costumbre del lugar.

34.- Según el artículo 17 de la Ley 3/1983, del 15 de junio, de normalización lingüística:

- a) En las Escuelas Universitarias y demás centros de Formación del Profesorado será voluntario el estudio de la lengua gallega.
- b) En las Escuelas Universitarias y demás centros de Formación del Profesorado se promoverá el estudio de la lengua gallega
- c) En las Escuelas Universitarias y demás centros de Formación del Profesorado será obligatorio el estudio de la lengua gallega y el castellano.
- d) En las Escuelas Universitarias y demás centros de Formación del Profesorado será obligatorio el estudio de la lengua gallega.

35.- Conforme al artículo 10 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística de Galicia, la determinación del nombre oficial de los municipios de Galicia corresponde:

- a) Al Parlamento de Galicia.
- b) A la Xunta de Galicia.
- c) Al Estado.
- d) A cada municipio.

36.- Conforme al artículo 48 apartado tercero de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿de qué plazo dispone la Administración para remitir el expediente administrativo?:

- a) De veinte días, a contar desde la notificación de la resolución judicial.
- b) De veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- c) De treinta días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- d) De treinta días, a contar desde la notificación de la resolución del Secretario Judicial.

37. Conforme al artículo 49 apartado primero de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿de qué plazo disponen los interesados emplazados para personarse en el recurso contencioso-administrativo?:

- a) Nueve días.
- b) Cinco días.
- c) Veinte días.
- d) Quince días.

38.- Conforme el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración:

- a) No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- b) Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- c) Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos establecidos en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
- d) Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La competencia se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, incluidas las de carácter constitucional y penal.

39.- Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en relación con la cesión de los tributos a las Comunidades Autónomas cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta y se ajusta a la literalidad del precepto:

- a) Todos los tributos pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas.
- b) Puede ser cedido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- c) Puede ser cedido el Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo del cincuenta por ciento para el tipo estatal general.
- d) Puede ser cedido el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos.

40.- Conforme el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos se resolverán:

- a) Por el Fondo de Compensación Interterritorial.
- b) Por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
- c) Por una Junta Arbitral.
- d) Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

SEGUNDA PARTE. CUESTIONARIO CONTENIDO TEÓRICO

41.- Conforme al artículo 23 apartado cuarto de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia y en relación con el procedimiento de concesión de subvenciones señale qué afirmación es correcta:

- a) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de un año.
- b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá ser superior a nueve meses, en ningún caso.
- c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá sobrepasar los nueve meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.
- d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses.

42.- Conforme el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de Galicia, el contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones no incluye:

- a) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
- b) Criterios objetivos de adjudicación de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.
- c) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
- d) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

43.- Conforme el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de Galicia, la presentación de la solicitud de concesión de subvención por el interesado en el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva:

- a) Conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consejería competente en materia de economía y hacienda de la Xunta de Galicia, cuando así se prevea en las bases reguladoras.
- b) Conllevará el inicio del procedimiento de concesión.
- c) Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente la inadmitirá, previa resolución.
- d) Conllevará el inicio del procedimiento de concesión cuando se acompañe de los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria.

44.- Conforme al artículo 27 de la Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de Galicia, la actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros:

- a) En ningún caso podrá sobrepasar del 40 por ciento del importe de la actividad subvencionada.
- b) No sobrepasará del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención.
- c) Podrá sobrepasar el 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada cuando su importe no sea superior a 40.000 euros.
- d) Deberá formalizarse contrato por escrito cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 30 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 20.000 euros.

45.- Según el artículo 7 de la ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia, requerirá autorización del Consello de la Xunta la concesión de subvenciones que superen la cuantía de 3.000.000 de euros por beneficiario:

- a) La autorización implicará la aprobación del gasto, que corresponderá, en todo caso, al órgano competente para la concesión.
- b) La autorización implicará la disposición del gasto, que corresponderá, en todo caso, al órgano competente para la concesión.
- c) La autorización no implicará la aprobación del gasto, que corresponderá, en todo caso, al órgano competente para la concesión.
- d) La autorización no implicará la disposición del gasto, que corresponderá, en todo caso, al órgano competente para la concesión.

46.- Según el artículo 29 de la ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia, señale cuál de los siguientes gastos no será subvencionable:

- a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
- b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
- c) Los gastos de procedimientos judiciales.
- d) Todos los anteriores.

47.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 ley 9/2007, del 13 de enero, de subvenciones de Galicia, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones será:

- a) El interés legal del dinero incrementado en un 15 por ciento, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente y del previsto para los fondos procedentes de la Unión Europea en su legislación específica.
- b) El interés legal del dinero incrementado en un 10 por ciento, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente y del previsto para los fondos procedentes de la Unión Europea en su legislación específica.
- c) El interés legal del dinero incrementado en un 5 por ciento, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente y del previsto para los fondos procedentes de la Unión Europea en su legislación específica.
- d) El interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente y del previsto para los fondos procedentes de la Unión Europea en su legislación específica.

48. Conforme al artículo 29 de la Ley 9/2007 de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en relación a los tributos como gasto subvencionable:

- a) Son subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abona efectivamente.
- b) En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación
- c) En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos personales sobre la renta.
- d) Todas son correctas.

49.- Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia y solo en atención a lo previsto en esa norma y precepto, ¿cuál de los siguientes no es un principio de organización de la Administración general?:

- a) Jerarquía.
- b) Desconcentración.
- c) Proximidad a los ciudadanos.
- d) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

50.- Conforme al artículo 23 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, señale qué afirmación es correcta:

- a) La creación, modificación y supresión de consejerías será aprobada por decreto del Consello de la Xunta.
- b) La creación de consejerías será aprobada por decreto de la persona titular de la Presidencia de la Xunta, y su modificación y supresión será aprobada por Orden.
- c) La creación, modificación y supresión de consejerías será aprobada por decreto de la persona titular de la Presidencia de la Xunta.
- d) La creación, modificación y supresión de consejerías será aprobada por Orden de la persona titular de la Presidencia de la Xunta.

51.- Conforme el artículo 22 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y Sector Público autonómico de Galicia, los órganos colegiados cuyas funciones sean exclusiva o principalmente emitir informes o propuestas, asesorar o resolver consultas se denominarán:

- a) Consejos.
- b) Órganos asesores.
- c) Comisiones asesoras.
- d) Comisiones técnicas.

52.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y Sector Público autonómico de Galicia, la extinción de las entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico se llevará a cabo:

- a) En los términos previstos en la ley que autoriza su creación o, a falta de previsión expresa de ésta, por decreto del Consello de la Xunta, a propuesta de la consejería de adscripción, previo informe favorable de las consejerías competentes en materia de administraciones públicas y de hacienda.
- b) Por decreto del Consello de la Xunta, a propuesta de la consejería competente en materia de administraciones públicas y de hacienda.
- c) Por acuerdo del Consello de la Xunta, que determinará el destino de los bienes, de los derechos y de las obligaciones de los organismos así como las medidas aplicables a los empleados del organismo que se suprime.
- d) De conformidad con lo previsto en sus estatutos.

53.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y Sector Público autonómico de Galicia, las Secretarías Generales se podrán integrar:

- a) En la estructura de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de las vicepresidencias, de existir estas.
- b) En la estructura de la Presidencia de la Xunta de Galicia.
- c) En la estructura de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de las consellerías.
- d) En la estructura de las consellerías, de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de las vicepresidencias, de existir estas.

54.- Según el artículo 25 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de Galicia, son órganos superiores de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia (Indique la incorrecta):

- a) La Presidencia de la Xunta de Galicia.
- b) El Consello de la Xunta de Galicia.
- c) Las Consellerías.
- d) Las Secretarías generales.

55.- Las fases del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de Galicia, son:

- a) Dos: la inicial y la final.
- b) Cuatro: la inicial, la intermedia, la de revisión y la final.
- c) Tres: la inicial, la intermedia y la final.
- d) El procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas, de carácter general, no consta de fases.

56. Conforme al artículo 13 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general del sector público autonómico de Galicia, en relación a los conflictos de atribución positivos:

- a) El órgano que se considere competente requerirá de inhibición a aquel que conozca del asunto, el cual suspenderá el procedimiento por un plazo de cinco días hábiles.
- b) El órgano que se considere competente remitirá las actuaciones a su superior jerárquico que decidirá en el plazo de diez días naturales.
- c) El órgano que se considere competente requerirá de inhibición a aquel que conozca del asunto, el cual suspenderá el procedimiento por un plazo de diez días hábiles.
- d) El órgano que se considere competente requerirá de inhibición a aquel que conozca del asunto el cual suspenderá el procedimiento por un plazo de quince días hábiles.

57.- Según el artículo 110 del Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad en sus distintas fases, es competencia de:

- a) Consello de la Xunta de Galicia.
- b) Consellería de Hacienda y Administración pública.
- c) Consellería de Economía, Industria e Innovación.
- d) Intervención General de la Comunidad autónoma.

58.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 112 del Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, las funciones como centro gestor de la contabilidad pública, le corresponden:

- a) A la Consellería de Hacienda y Administración pública.
- b) A la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
- c) A la intervención delegada correspondiente.
- d) A la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

59.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 121 del Decreto Legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, la Cuenta general de la Comunidad Autónoma de cada año se remitirá, previo acuerdo del Consello de la Xunta, al Consello de Contas y al Tribunal de Cuentas antes del:

- a) 30 de septiembre del año al que se refiere.
- b) 30 de octubre del año al que se refiere
- c) 30 de octubre del año siguiente al que se refiere.
- d) 30 de septiembre del año siguiente al que se refiere.

60.- Conforme al artículo 77 del Decreto Legislativo 1/1999 de 7 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, las órdenes de pago cursadas con el carácter de a justificar se aplicarán a los créditos presupuestarios que correspondan y sus perceptores quedarán obligados a justificar su aplicación en el plazo de:

- a) Un año.
- b) Un mes.
- c) Tres meses
- d) Diez días.

61.- Conforme al artículo 96 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de La ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, la función interventora se ejercerá conforme a los principios de:

- a) Dependencia funcional, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y actuación contradictoria.
- b) Autonomía funcional, ejercicio descentralizado, jerarquía interna y actuación contradictoria
- c) Autonomía funcional, ejercicio desconcentrado, jerarquía externa y actuación independiente
- d) Autonomía funcional, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y actuación contradictoria.

62.- Conforme el artículo 46 quater del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, un Plan sectorial es:

- a) Un conjunto ordenado de actuaciones que abarcan varias políticas de gasto o departamentos de la Comunidad Autónoma al objeto de alcanzar uno o varios objetivos estratégicos para Galicia.
- b) Un conjunto ordenado de actuaciones sectoriales que colaboran en la consecución de uno o varios objetivos estratégicos para Galicia.
- c) El instrumento que fija la finalidad última de los actos de gobierno y precisa, jerarquiza y establece prioridades, ordenando y dotando de coherencia al conjunto de actividades que la Xunta llevará a cabo a medio plazo.
- d) Una diagnosis de la situación, en objetivos estratégicos y operativos y en indicadores y sistemas de información que permitan el seguimiento del Plan Estratégico.

63.- Conforme el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, en cuanto a la estructura de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, se presentarán con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, y su clasificación económica se regirá por los siguientes criterios:

- a) En los créditos para gastos corrientes se distinguirán los de funcionamiento de los servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.
- b) En los créditos para gastos corrientes se distinguirán los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financiero.
- c) En los estados de gastos se detallarán las estimaciones de los derechos económicos que se liquidarán durante el ejercicio presupuestario.
- d) En los estados de gastos se detallarán los derechos liquidados en el transcurso del mismo, cualquiera que sea el período al que correspondan.

64.- Conforme al artículo 46 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática:

- a) De los objetivos que se pretendan conseguir con la utilización de los recursos financieros consignados en los mismos.
- b) De las obligaciones reconocidas en el ejercicio presupuestarios.
- c) De los beneficios estimados.
- d) De la totalidad de los gastos e ingresos de las sociedades públicas.

65.- Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, los Cuerpos de Policía Local se rigen:

- a) Por el Estatuto Básico del empleado público.
- b) Por la legislación de la Comunidad autónoma.
- c) Por el Estatuto Básico del empleado público y por la legislación de la Comunidad autónoma.
- d) Por el Estatuto Básico del empleado público y por la legislación de la Comunidad autónoma, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

66.- La ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse, según el artículo 70 del Real Decreto 5/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, dentro del plazo:

- a) De dos años, prorrogable por otros dos.
- b) De tres años, prorrogable por un año.
- c) Improrrogable de dos años.
- d) Improrrogable de tres años.

67.- Conforme al artículo 31.6 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, tendrán legitimación para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección:

- a) Las Mesas Generales de Negociación.
- b) Las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel provincial.
- c) Las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel autonómico.
- d) Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública

68.- Conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través:

- a) De los procedimientos previstos en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- b) De los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.
- c) De los procedimientos selectivos previstos en este Estatuto.
- d) De los procedimientos de evaluación del desempeño.

69.- Conforme el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores (señale la respuesta incorrecta):

- a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
- b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
- c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
- d) La participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

70.- Conforme el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder participar en los procesos selectivos para el acceso al empleo público:

- a) Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.
- b) No podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos distintos de los establecidos como requisitos generales.
- c) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea no podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de las agrupaciones de funcionarios que determinen los órganos de gobierno de las Administraciones públicas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

71.- Conforme el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas:

- a) Las pruebas podrán consistir en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas.
- b) Las pruebas no podrán consistir en la superación de pruebas físicas.
- c) Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos de los aspirantes, expresados exclusivamente de forma escrita.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

72.- De conformidad con los artículos 63 y 64 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario:

- a) Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera e inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento establecido.
- b) Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera e inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública cuando sea aceptada expresamente por la Administración.
- c) Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Será aceptada expresamente por la Administración cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
- d) Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Habrá de ser manifestada por escrito.

73.- Conforme a lo dispuesto por la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, en su artículo 163 ¿cuál de los siguientes no están legitimados para convocar una reunión?:

- a) La Mesa de negociación.
- b) Los delegados de personal.
- c) Las juntas de personal.
- d) Los comités de empresa.

74.- La realización dentro de la jornada de trabajo, de forma reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades, de carácter personal o profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, se trataría de una falta:

- a) Grave.
- b) Muy grave.
- c) Leve.
- d) Muy grave, grave o leve dependiendo del tiempo empleado.

75.- Según lo establecido en el artículo 188 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, el demérito, que puede consistir en la imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna por un período de entre dos años y un día y cuatro años, se trataría de una sanción:

- a) Por faltas graves.
- b) Por faltas muy graves.
- c) Por faltas leves.
- d) No se trata de una sanción prevista en la Ley 2/2015.

76.- Conforme al artículo 169 de la Ley 2/2015 de 29 de abril, del empleo público de Galicia el plazo para solicitar el reingreso al servicio activo tras una situación de servicios especiales es:

- a) Dos meses a contar desde el día siguiente al de cese en la situación de servicios especiales.
- b) Seis meses a contar desde el día siguiente al de cese en la situación de servicios especiales.
- c) Tres meses a contar desde el día siguiente al de cese en la situación de servicios especiales.
- d) Un mes a contar desde el día siguiente al de cese en la situación de servicios especiales.

77.- Conforme al artículo 23 de la Ley 2/2015 de 29 de abril, del empleo público de Galicia el nombramiento de un interino por exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, tendrá una duración máxima de:

- a) 5 meses dentro de un período de 12 meses
- b) 3 meses dentro de un período de 12 meses
- c) 6 meses dentro de un período de 10 meses
- d) 9 meses dentro de un período de 18 meses.

78.- Conforme al artículo 173 de la Ley 2/2015 de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario de carrera puede obtener la excedencia por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de:

- a) Tres años inmediatamente anteriores a la solicitud.
- b) Dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.
- c) Un año inmediatamente anterior a la solicitud.
- d) Cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

79.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, el Registro de Personal y puestos de trabajo se estructurará en las siguientes secciones:

- a) Sección de personal funcionario y laboral, sección de puestos de trabajo, sección de personal eventual.
- b) Sección de personal funcionario, sección de personal laboral, sección de puestos de trabajo.
- c) Sección de empleo público, sección de personal directivo y sección de puestos de trabajo.
- d) Sección de personal funcionario, sección de personal laboral fijo y temporal, sección de puestos de trabajo.

80.- Según lo dispuesto en los artículos 60 a 62 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, el acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Galicia y del resto del ordenamiento jurídico, así como de compromiso de ejercer con imparcialidad sus funciones, es un requisito:

- a) Para la adquisición de la condición de personal eventual.
- b) Para la adquisición de la condición de personal funcionario interino, pero no para la adquisición de la condición de personal eventual.
- c) Para la adquisición de la condición de personal eventual, pero no para la adquisición de la condición de funcionario interino.
- d) Para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera, pero no para la adquisición de la condición de funcionario interino.

81.- Conforme al artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada:

- a) En un 35 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- b) En un 45 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- c) En un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- d) En un 30 por 100.

82.- De conformidad con el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La resolución reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad:

- a) Se dictará en el plazo de un mes.
- b) Se dictará en el plazo de dos meses.
- c) Se dictará en el plazo de seis meses.
- d) Se dictará en el plazo de 15 días hábiles.

83.- Según el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

- a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los tres últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
- b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
- c) La participación superior al 12 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.
- d) Todas las anteriores son correctas.

84.- Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, sobre el reconocimiento de la compatibilidad para actividades privadas a quienes se le hubiera autorizado un segundo puesto o actividad públicos, señale la correcta:

- a) No podrá reconocerse en ningún caso.
- b) No podrá reconocerse siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en la Administraciones públicas.
- c) No podrá reconocerse siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o inferior a la máxima en la Administraciones públicas.
- d) Ninguna es correcta.

85.- Conforme al artículo 14 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas:

- a) Únicamente será susceptible de compatibilidad para el personal con una antigüedad superior a 7 años.
- b) No requerirá el previo reconocimiento de la compatibilidad.
- c) No será susceptible de compatibilidad.
- d) Requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

86. Conforme al artículo 3 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de -

- a) Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y se condiciona al estricto cumplimiento de ambos.
- b) No será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad siempre que no suponga modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y se cumplan estrictamente ambos.
- c) Únicamente será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad si supone modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos.
- d) No es posible.

87.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la predominancia en los cuerpos, escalas, grupos o categorías, se entiende cuando:

- a) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, treinta puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.
- b) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, veinte puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.
- c) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, veinticinco puntos entre el número de mujeres y el número de hombres
- d) En el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual de, por lo menos, diez puntos entre el número de mujeres y el número de hombres.

88.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la Administración pública gallega facilitará que las trabajadoras embarazadas y las madres lactantes:

- a) Tengan la posibilidad de lactar a su hijo o hija, solo en caso de lactancia artificial.
- b) Tengan la posibilidad de descansar tumbadas cuando un informe médico, así lo establezca, en lugar apropiado y lactar a su hijo o hija con tranquilidad. Las mismas condiciones se darán en el caso de lactancia artificial.
- c) Tengan la posibilidad de descansar tumbadas en lugar apropiado y lactar a su hijo o hija con tranquilidad. Las mismas condiciones se darán en el caso de lactancia artificial.
- d) Tengan la posibilidad de descansar cuando un informe médico, así lo establezca, en un lugar apropiado y lactar a su hijo o hija con tranquilidad.

89.- Conforme al artículo 94 bis del Decreto legislativo 2/2015 de 12 de febrero por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad en los casos de accidente o enfermedad muy grave del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, el personal al servicio de la Administración pública gallega tiene derecho a un permiso retribuido para atender su cuidado con una duración máxima de:

- a) Treinta días naturales.
- b) Treinta días hábiles.
- c) Veinte días naturales.
- d) Veinte días hábiles.

90.- Conforme al artículo 56 del Decreto legislativo 2/2015 de 12 de febrero por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para prevenir el acoso sexual se adoptarán las siguientes medidas:

- a) La elaboración de una declaración de principios y el establecimiento de un procedimiento informal de solución.
- b) La elaboración de una declaración de principios y el establecimiento de un procedimiento formal de solución.
- c) La elaboración de una normativa interna en forma de Circular.
- d) La elaboración de una normativa interna que será publicada en el portal web.

91.- Conforme al artículo 46 del Decreto legislativo 2/2015 de 12 de febrero por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la Administración pública gallega fomentará la composición equilibrada entre los sexos del personal:

- a) Funcionario, eventual, interino, estatutario o laboral a su servicio.
- b) Únicamente del funcionario, interino, estatutario o laboral a su servicio.
- c) Únicamente del personal funcionario a su servicio.
- d) Ninguna es correcta.

92.- De acuerdo con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, indique cuál es la definición del Consejo Nacional de la Discapacidad:

- a) Es un órgano colegiado interministerial carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- b) Es la entidad instrumental, en que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
- c) Es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
- d) Es el órgano colegiado interministerial, de carácter participativo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.

93.- De acuerdo con el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a efectos de determinar si un ajuste es razonable, se tendrán en cuenta:

- a) Los costes de la medida.
- b) Los efectos discriminatorios que suponga para las personas sin discapacidad su adopción.
- c) Las exigencias de accesibilidad.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

94.- De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, inclusión social es:

- a) La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- b) El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
- c) El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona
- d) El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

95.- De conformidad con el artículo 29 bis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva:

- a) Son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos.
- b) Son las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
- c) Serán objeto de desarrollo normativo específico, que será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas, y abarcará todos los ámbitos y áreas. Estas condiciones serán exigibles en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha ley.
- d) Serán reguladas por las comunidades autónomas.

96.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se define el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, como:

- a) Discriminación indirecta.
- b) Discriminación por asociación.
- c) Normalización.
- d) Acoso.

97. Conforme al artículo 2 del Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social se entiende por discriminación directa:

- a) La situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
- b) La situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera más favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
- c) La situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera diferente que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
- d) Ninguna es correcta.

98.- Conforme al artículo 3 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, las disposiciones de este título (Título I) se aplicarán a las siguientes entidades:

- a) A las corporaciones de derecho público.
- b) Al Consejo de la Cultura Gallega.
- c) A las entidades vinculadas o dependientes de las universidades del Sistema universitario de Galicia.
- d) Todas las anteriores son falsas.

99.- Conforme al artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, señale que afirmación es la correcta:

- a) Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante la Comisión Galega da Transparencia.
- b) Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Valedor do Pobo, salvo, entre otros casos, aquellas dictadas por el Consello Galego de Relacións Laborais, contra las que, conforme a lo previsto en la normativa básica, solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
- c) Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante la Comisión Galega de Transparencia, salvo en aquellas dictadas por los sujetos previstos en el artículo 3.1.d) de la presente ley, contra las que, conforme a lo previsto en la normativa básica, cabrá la interposición de recurso ante el Valedor do Pobo.
- d) Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Valedor del Pueblo.

100.- Conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y de buen gobierno, en relación con las obligaciones de información sobre convenios, cada Consellería o entidad habrá de remitir para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, una relación de los convenios suscritos referida al cuatrimestre anterior:

- a) Dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año.
- b) Dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, marzo, junio y octubre de cada año.
- c) Dentro de los primeros quince días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año.
- d) Dentro de los primeros quince días de los meses de enero, marzo, junio y octubre de cada año.

101. Conforme al artículo 27 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hubiesen solicitado, lo antes posible y como más tarde:

- a) En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- b) En el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- c) En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- d) En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

102.- Según el artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, cuando una solicitud de acceso a la información se refiera a información que afecte a derechos e intereses de terceros:

- a) Se les concederá un plazo de diez días para que puedan formular alegaciones.
- b) La persona solicitante está obligada a motivar su solicitud.
- c) El traslado de la solicitud a la persona afectada producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo concedido para su presentación.
- d) Contra la resolución expresa o presunta no podrá interponerse reclamación.

103.- Según el artículo 45 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo:

- a) Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.
- b) Durante los dieciocho meses siguientes a la fecha de su cese.
- c) Durante los cinco años siguientes a la fecha de su cese.
- d) De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

104.- Según el artículo 50 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el Gobierno de la Xunta en funciones podrá:

- a) Autorizar convenios o acuerdos con el Gobierno de España o con otras comunidades autónomas, entidades locales y universidades.
- b) Aprobar o modificar las relaciones de puestos de trabajo del sector público autonómico.
- c) Adquirir compromisos de gasto que tengan la consideración de gasto corriente.
- d) Resolver expedientes que pongan fin a la aprobación o denegación de planes previstos en la normativa de ordenación territorial o medioambiental.

105.- Según el artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la persona solicitante de acceso a la información:

- a) Deberá dirigir su solicitud a la Comisión de Transparencia.
- b) No está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información. Podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
- c) Deberá dirigir su solicitud al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- d) No está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

106.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público cuál de los siguientes hace referencia a contenido mínimo de los contratos celebrados por las entidades del sector público:

- a) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.
- b) Las condiciones de pago.
- c) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
- d) Todas las alternativas son ciertas.

107.- Al amparo del artículo 42 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, señale qué afirmación es correcta:

- a) La nulidad de los actos preparatorios solo afectará a estos y sus consecuencias.
- b) La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus consecuencias.
- c) La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos, pero no a sus consecuencias.
- d) La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo, en todo caso.

108.- Conforme al artículo 160 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, indique qué afirmación es correcta:

- a) El procedimiento restringido es especialmente adecuado para los contratos de algunos servicios de asistencia y defensa jurídica, de arquitectura o de ingeniería.
- b) En el procedimiento restringido podrá presentarse proposición por cualquier empresario.
- c) En el procedimiento restringido estará permitida la negociación.
- d) En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.

109.- La duración de los contratos de arrendamiento de los bienes muebles no podrán exceder, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público:

- a) De cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
- b) De cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas.
- c) De diez años, incluyendo las posibles prórrogas.
- d) De veinte años.

110.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, sobre el presupuesto base de licitación, señale la incorrecta:

- a) Al elaborarlo los órganos de contratación cuidarán de que sea adecuado a los precios del mercado.
- b) Se desglosará indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
- c) Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de sistema dinámico de adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.
- d) Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

111.- Conforme al artículo 237 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la ejecución del contrato de obra comenzará:

- a) Con el acta de comprobación del replanteo.
- b) Con la aprobación del expediente de licitación.
- c) Con la aprobación del proyecto técnico.
- d) Con el informe de supervisión del proyecto técnico.

112.- Conforme al artículo 242 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cuando en un expediente de modificación del contrato sea necesario introducir nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar nueva licitación, si los precios no son aceptados por el contratista, el órgano de contratación:

- a) Puede obligar al contratista mediante la imposición de penalidades.
- b) Debe obligatoriamente resolver el contrato.
- c) Puede contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado.
- d) Ninguna es correcta.

113.- Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el precio de los contratos:

- a) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- b) No se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso no se indicará como partida independiente.
- d) Los contratos del sector público no tendrán un precio cierto.

114.- Conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indique qué opción es correcta:

- a) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
- b) Cuando el interesado alegue discriminación ha de aportar indicios fundados sobre su existencia.
- c) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos que substancien.
- d) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquéllos, harán prueba plena de los hechos.

115.- Conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, señale cuál opción es la más correcta:

- a) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad ni al interés público.
- b) Las Administraciones Públicas podrán rectificar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
- c) Las Administraciones Públicas podrán revocar, en el plazo de cuatro años, sus actos, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes.
- d) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

116.- Conforme al artículo 17 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la eliminación de los documentos electrónicos:

- a) Deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable
- b) Se hará de oficio transcurridos 20 años.
- c) Requerirá resolución judicial.
- d) No será posible en ningún caso.

117.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos:

- a) Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
- b) Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa, los supuestos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
- c) Se exceptúan de la obligación de resolver los procedimientos iniciados de oficio.
- d) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de tres meses.

118.- De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Las actuaciones previas:

- a) Serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de inspección en la materia o por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para resolución del procedimiento.
- b) Serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- c) Serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación del procedimiento.
- d) Serán realizadas por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación.

119.- De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público:

- a) Se entenderá que este tiene carácter preceptivo.
- b) Se entenderá que este tiene carácter preceptivo y vinculante.
- c) Se entenderá que este tiene carácter facultativo y vinculante.
- d) Se emitirá en el plazo de treinta días.

120.- De acuerdo con el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones que pongan fin al procedimiento sancionador:

- a) Serán ejecutivas desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellas se disponga otra cosa.
- b) Serán ejecutivas cuando no quepa contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa.
- c) Serán ejecutivas desde la fecha de su notificación.
- d) Serán ejecutivas desde la fecha de su notificación o publicación.

121.- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tomará como fecha de notificación:

- a) La de puesta a disposición de la notificación electrónica, cuando esta haya sido elegida expresamente por el interesado.
- b) La de puesta a disposición de la notificación electrónica, cuando se trate de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- c) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
- d) La de aquella que se reciba por el cauce elegido expresamente por el interesado.

122.- Conforme al artículo 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización:

- a) Cuando el particular haya obtenido, en primera instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
- b) Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
- c) Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.
- d) Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

123.- Quién fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- a) El Tribunal Constitucional.
- b) EL Ministro de Justicia.
- c) Al Consejo de Estado.
- d) El Consejo de Ministros.

124.- Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los convenios deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda:

- a) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción, aquellos cuyos compromisos económicos asumidos superen los 60.000 €.
- b) Dentro de los dos meses siguientes a la suscripción, aquellos cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 €.
- c) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción, aquellos cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 €.
- d) Dentro de los dos meses siguientes a la suscripción, aquellos cuyos compromisos económicos asumidos superen los 60.000 €.

125.- De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las actuaciones administrativas automatizadas:

- a) Previamente se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
- b) Deberán establecerse previamente mediante orden del departamento responsable de la actuación.
- c) Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa el interesado.
- d) Todas son correctas.

126.- De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán tener una duración determinada:

- a) Que no podrá ser superior a un año. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
- b) Que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- c) Que no podrá ser superior a dos años en el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
- d) Que podrá prorrogarse por un período máximo de un año.

127.- De acuerdo con el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Conferencia de Presidentes:

- a) Es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
- b) Estará asistida para la preparación de sus reuniones por Comisiones Sectoriales y Grupos de Trabajo.
- c) Estará asistida para la preparación de sus reuniones por comisiones Bilaterales de Cooperación.
- d) Ejercerá funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes y fijará los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico.

128.- De acuerdo con el artículo 14. *Decisiones sobre competencia*, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
- b) Los interesados que sean parte en el procedimiento no podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
- c) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto requerirá a los interesados para que subsanen su solicitud.
- d) No podrán suscitarse conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración.

129.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Universidades Públicas:

- a) Tienen la consideración de Administración Pública.
- b) Integran el sector público institucional.
- c) No están comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015.
- d) Son entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

130.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En relación con la publicación de las instrucciones y órdenes de servicio:

- a) Deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- b) Se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.
- c) Se publicarán en el boletín oficial que corresponda, cuando establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad.
- d) Para su validez será necesaria su publicación.

SEGUNDA PARTE. PREGUNTAS SUPUESTO PRÁCTICO

TEXTO 1.

La Agencia de Turismo de Galicia, licita la rehabilitación de un puente histórico en el Concello de Tui y la urbanización del entorno del albergue de peregrinos situado en el mismo Concello.

La tipificación del contrato es de obras, según lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Así mismo, se tipifican como contrato de: obras de reforma, obras de rehabilitación y obras de gran reparación.

El cálculo del presupuesto de base de licitación (PBL) se realizó conforme al proyecto de las obras y es el siguiente:

Importe IVE excluido	IVE (21%)	Importe IVE incluido
231.044,54 €	48.519,36 €	279.563,90 €

Lotes:

Lote	OBRA	PBL	IVE	TOTAL
1	Ponte Histórica	120.969,27	25.403,55	146.372,82
2	Reurbanización do entorno	110.075,27	23.115,81	133.191,08
TOTAL		231.044,54	48.519,36	279.563,90

Plazos de ejecución: Lote 1: 4 meses, Lote 2: 3 meses.

No procede la determinación del precio por precios unitarios, ni modificaciones ni prórrogas.

Tramitación del procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto simplificado.

Plazo de garantía: 12 meses

Por su parte, el Concello de Tuy precisa contratar el servicio de atención telefónica de la ciudadanía durante un período de 12 meses estando previsto el inicio el 01.06.2024 y la finalización el 31.05.2025.

No se prevén modificaciones ni prórrogas.

El presupuesto base de licitación es de 108.900 euros (90.000 euros+ IVA 21% 18.900 euros).

El contrato se adjudica por 80.000 euros + IVA 21% (16.800 euros): 96.800 euros. Durante la ejecución del contrato se detectan incumplimientos por lo que se procederá a imponer penalidades.

131.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 232 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, las obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble son:

- a) Obras de reforma.
- b) Obras de rehabilitación.
- c) Obras de gran reparación.
- d) Obras de restauración.

132.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, atendiendo a los datos del supuesto, señale cual sería el importe del valor estimado y el del presupuesto base de licitación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público:

- a) El valor estimado: 279.563,90€ y el presupuesto base de licitación: 231.044,54€.
- b) El valor estimado: 231.044,54€ y el presupuesto base de licitación: 279.563,90€.
- c) El presupuesto base de licitación y el valor estimado, en este caso al no tener modificaciones ni prórrogas sería el mismo: 231.044,54 €.
- d) El presupuesto base de licitación y el valor estimado, en este caso al no tener modificaciones ni prórrogas sería el mismo: 279.563,90 €.

133.- Con relación al contrato del Concello de Tuy, y conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cual es el valor estimado?:

- a) 80.000 euros.
- b) 96.800 euros.
- c) 108.900 euros.
- d) 90.000 euros.

134.- Con relación al contrato del Concello de Tuy, y conforme al artículo 102 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cual es el precio del contrato?:

- a) 80.000 euros.
- b) 96.800 euros.
- c) 100.000 euros.
- d) 108.900 euros.

135.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, el plazo de presentación de las ofertas, teniendo en cuenta los datos expuestos en el supuesto práctico y que la tramitación no fue sujeta a regulación armonizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.3 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, será:

- a) No inferior a 30 días a contar desde el siguiente a la publicación.
- b) Como mínimo de 15 días a contar desde el siguiente a la publicación
- c) No inferior a 26 días a contar desde el siguiente a la publicación.
- d) Como mínimo de 20 días a contar desde el siguiente a la publicación.

136.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, y conforme al procedimiento de adjudicación señalado en el supuesto y lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, señale la incorrecta:

- a) No procederá la constitución de la garantía provisional.
- b) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.
- c) Los licitadores deberán estar inscritos en el registro oficial de licitadores y de empresas clasificadas del sector público, en el registro autonómico o tener presentado la solicitud de inscripción con la documentación preceptiva.
- d) Por ser un procedimiento abierto simplificado no es necesaria la inscripción en el registro oficial de licitadores y de empresas clasificadas del sector público, en el registro autonómico o la solicitud de inscripción con la documentación preceptiva.

137.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, y atendiendo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, la garantía definitiva que debe presentar el adjudicatario será:

- a) El 5% del precio final ofertado por el licitador, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) El 5% del precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) El 5% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) El 5% del valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

138.- Con relación al contrato del Concello de Tuy y conforme al artículo 192 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, el importe de las penalidades que se impongan no puede superar:

- a) 10% del precio del contrato.
- b) 50% del precio del contrato.
- c) 20% del precio del contrato.
- d) 15% del precio del contrato.

139.- La misma Agencia de Turismo de Galicia precisa contratar a una persona, como docente, para un curso de formación dirigido al personal propio. El curso se impartirá durante 5 meses, con una duración de 200 horas y se impartirá en las instalaciones del propio organismo. El importe a pagar al docente será de 14.500,00€, sin IVA.

De acuerdo con los datos del supuesto y con lo establecido en el artículo 310 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, para acreditar la existencia de este contrato bastará:

- a) La tramitación, con el docente, de un contrato menor, siendo suficiente que incorpore al expediente de la factura.
- b) La designación o nombramiento del docente.
- c) La tramitación, con el docente, de un procedimiento abierto, sometido a regulación armonizada y su formalización en un documento administrativo, sin que se eleve a escritura pública.
- d) Todas son incorrectas.

140.- Con relación a este último contrato y conforme con lo establecido en el artículo 310 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, ¿es posible establecer el pago parcial anticipado?:

- a) No, por tratarse de un contrato de actividad docente.
- b) Si, por tratarse de un contrato de actividad docente, previa constitución de garantía por parte del contratista, sin que se pueda autorizar su cesión.
- c) Si, por tratarse de un contrato de actividad docente no es necesaria la previa constitución de garantía por parte del contratista.
- d) Si, por tratarse de un contrato de actividad docente, previa constitución de garantía por parte del contratista, pudiendo autorizarse su cesión.

TEXTO 2

El 29 de marzo de 2021, doña XX (mujer joven y sin problemas de salud previos) presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Santiago, por los daños sufridos a consecuencia de una caída. En el escrito señala: "El 1 de noviembre de 2017, alrededor de las 17:00 horas, paseando con su familia (marido e hijos menores de edad) por la zona del Ensanche, pisó una arqueta en la acera que se encontraba desnivelada respecto al resto del pavimento, lo que le provocó una flexión y supinación forzadas del pie, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo". Junto con la reclamación aporta partes de asistencia sanitaria y fotografías del lugar donde aconteció el percance, en las que se ve la arqueta del servicio de saneamiento de aguas residuales ligeramente hundida, y solicita una indemnización de 100.000 euros. La reclamante alega, a efectos de la valoración, que estuvo incurso en diferentes períodos de incapacidad temporal (desde el día 2.11.2017 al 3.11.2017, desde el día 13.11.2017 al 29.11.2017, desde el 2.2.2018 al 4.5.2018, y desde el 25.3.2019 al 11.9.2020), todos ellos con la correspondiente justificación médica,

si bien en el último el parte médico no habla de una recaída, como los tres primeros, sino de un nuevo esguince.

141.- Que órgano o entidad debe resolver inicialmente sobre la eventual responsabilidad patrimonial solicitada el 29 de marzo de 2021?:

- a) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
- b) El Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
- c) La empresa suministradora a la que corresponda la arqueta.
- d) La Diputación provincial de A Coruña para garantizar el principio de no ser juez y parte.

142.- Si el servicio de inspección municipal tuviese conocimiento de los hechos descritos sin que exista iniciativa por parte de doña XX, ¿podría intervenir de alguna manera?

- a) No, ya que no es competente.
- b) Sí, podría avocar la competencia e iniciar de oficio el procedimiento.
- c) Sí, podría cursar petición razonada al órgano competente identificando todos los elementos de la responsabilidad patrimonial.
- d) Solo podría hacerlo de advertir responsabilidad penal, dando traslado al Ministerio Fiscal.

143.- El órgano competente para realizar la instrucción del procedimiento, ¿debe solicitar algún informe?

- a) Sí, debe solicitar el informe del servicio de cuyo funcionamiento se derivó la presunta lesión, siendo exigible su emisión en el plazo máximo de 10 días.
- b) Sí, debe solicitar el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, siendo exigible su emisión en el plazo máximo de 10 días.
- c) Sí, debe solicitar el informe del servicio de cuyo funcionamiento se derivó la presunta lesión, siendo exigible su emisión en el plazo máximo de 5 días.
- d) Sí, debe solicitar el informe de la concejalía de Hacienda, que deberá valorar con carácter previo la existencia de crédito presupuestario para asumir la indemnización solicitada.

144.- En la instrucción del procedimiento, ¿el ente competente tiene que solicitar algún dictamen?:

- a) Debe solicitar dictamen de la asesoría jurídica de la Consellería con competencias en materia de régimen local, con carácter vinculante.
- b) Puede solicitar dictamen (facultativo) del Consello Consultivo de Galicia, pero de hacerlo, éste será vinculante.
- c) Debe solicitar dictamen (preceptivo, pero no vinculante) del Consello Consultivo de Galicia.
- d) Puede solicitar dictamen de la asesoría jurídica de la Consellería con competencias en materia de régimen local, con carácter no vinculante.

145.- En el desarrollo del procedimiento, tras la emisión de un informe del servicio técnico-jurídico, en el que considera que la solicitud no es ajustada a Derecho:

- a) Debe darse trámite de audiencia a la interesada por un plazo de entre 10 y 15 días.
- b) Debe otorgarse trámite de audiencia a la interesada por un plazo máximo de 10 días.
- c) Puede otorgarse trámite de audiencia a la interesada por un plazo máximo de 10 días.
- d) Puede omitirse el trámite de audiencia.

146.- Con independencia de las posibles circunstancias procedimentales, ¿sería factible el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial?:

- a) Sí, debería reconocerse, por existir daño cuantificable derivado del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
- b) No debería reconocerse, por tratarse de la arqueta de una empresa privada.
- c) Podría no reconocerse, en circunstancias normales, por existir concurrencia de culpa de la víctima.
- d) No podría reconocerse, por existir causa de fuerza mayor.

147.- La propuesta de resolución del procedimiento de solicitud de responsabilidad patrimonial:

- a) Será motivada, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, en todo caso.
- b) Será motivada, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho solo en el caso de separarse de la solicitud formulada por doña XX.
- c) Será motivada por remisión a los informes de dictámenes solicitados con carácter obligatorio en el marco del procedimiento.
- d) No será preciso motivarla, excepto en los casos en los que se separe de los informes y dictámenes solicitados con carácter obligatorio en el marco del procedimiento.

148.- Si no se produce respuesta de la Administración a la solicitud de responsabilidad patrimonial:

- a) La interesada puede considerar estimada su pretensión a partir de 29 de septiembre de 2021.
- b) La interesada debe considerar desestimada su pretensión a partir de 29 de septiembre de 2021.
- c) La interesada puede considerar estimada su pretensión a partir de 29 de marzo de 2022.
- d) La interesada debe considerar desestimada su pretensión a partir de 29 de marzo de 2022.

149.- Si doña XX no solicitara responsabilidad patrimonial de la Administración en el plazo de que dispone para hacerlo, pero el Ayuntamiento tuviera noticia del daño causado, ¿podría iniciar de oficio el procedimiento para declarar la responsabilidad patrimonial?:

- a) Sí, siempre que haya finalizado el plazo del que dispone la interesada para instarla.
- b) Sí, siempre que haya finalizado el plazo del que dispone la interesada para instarla y esta no se oponga.
- c) No, ya que la iniciación de oficio no cabe en el campo de la responsabilidad patrimonial.
- d) No, ya que la iniciación de oficio debería realizarse dentro del mismo plazo del que dispone el ciudadano para instarla.

150.- Si la Administración finalmente indemniza la doña XX, pero considera que la responsabilidad de la caída es del funcionario encargado del servicio de limpieza de la calle, por concurrir negligencia grave, en el procedimiento por el que se exige de oficio la responsabilidad en que incurriese el funcionario, ¿cuál de los siguientes trámites no es correcto?

- a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
- b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
- c) Audiencia durante un plazo de quince días.
- d) Planteamiento de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

151.- Desde el punto de vista procedimental, ¿considera que existe alguna circunstancia que podría impedir la tramitación y estimación de la solicitud realizada por doña XX?

- a) No, ya que se presenta ante el órgano competente y por la persona que sufrió el daño, adjuntando las justificaciones procedentes.
- b) Sí, puesto que el derecho a solicitar la responsabilidad patrimonial está prescrito.
- c) No, siempre y cuando la persona reclamante sea vecina del término municipal correspondiente.
- d) Sí, por estar presentada ante una administración incompetente.

TEXTO 3.

La empresa TYCO SL, afincada en Ribeira, ha percibido una subvención del IGAPE para el desarrollo de una nueva línea de negocio. En las actuaciones de comprobación se ha acreditado un incumplimiento en la llevanza de la contabilidad por parte de esa empresa. En concreto, los asientos contables no se ajustan al Plan General de Contabilidad ni a las exigencias de las bases.

En del desarrollo del procedimiento usted recibe las siguientes consultas:

152.- El órgano encargado de la tramitación de un procedimiento sancionador en el marco de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, le consulta si es posible imponer una sanción a esa empresa, y le pregunta cuál de las siguientes opciones de sanción no pecuniaria sería acorde a la normativa gallega de subvenciones para el incumplimiento que se reseña en el enunciado del supuesto, atendida la calificación de la conducta:

- a) No es posible una sanción no pecuniaria, en este caso.
- b) La pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones u otros entes públicos.
- c) La pérdida durante un plazo de hasta un año de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la presente ley.
- d) La prohibición durante un plazo de hasta un año para contratar con las administraciones públicas.

153.- El mismo órgano le consulta sobre el importe de las sanciones pecuniarias que procederían por el incumplimiento anterior referido. Indique cuál de las opciones siguientes tendría amparo en la normativa de subvenciones:

- a) Multa de 900 a 1.500 euros.
- b) Multa de 75 a 900 euros.
- c) Multa de 150 a 6.000 euros.
- d) Multa de 75 a 6.000 euros.

154.- La resolución sancionadora ha sido enviada electrónicamente a TYCO el día 15 de febrero de 2024. Así mismo, el día 19 de febrero de 2024, y ante el obstinado empeño de la empresa sancionada de recibir las comunicaciones y notificaciones, el funcionario responsable ha decidido notificar también a través de correo certificado con acuse de recibo, ese mismo día (19 de febrero). La notificación a través de correo postal es recibida el día 21 de febrero de 2024, mientras que la notificación electrónica se descargó por parte del representante la empresa destinataria, el día 23 de febrero. ¿Qué día se entiende practicada la notificación?

- a) El 21 de febrero de 2024.
- b) El 15 de febrero de 2024.
- c) El 23 de febrero, porque la empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración, como persona jurídica.
- d) Todas las anteriores son falsas.

155.- Con independencia de la respuesta dada a la pregunta inmediatamente anterior, la empresa TYCO pone en conocimiento de la Administración que la gestoría encargada de la llevanza de su contabilidad ha sido condenada por la comisión de un delito de falsedad documental precisamente en la llevanza de la contabilidad de TYCO y consiguientemente, insta la nulidad de la resolución sancionadora por tal motivo. ¿Tiene encaje la alegación de TYCO en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos legalmente?:

- a) Sí, porque la conducta es constitutiva de infracción penal, declarada por sentencia judicial firme en tanto la gestoría encargada de llevar la contabilidad del sancionado ha sido condenada por delito de falsedad documental.
- b) No.
- c) Sí, porque la conducta sancionada lo ha sido como consecuencia de la comisión de un delito.
- d) Sí, porque el acto tiene un contenido imposible en tanto la gestoría es la que cometió la infracción, no TYCO.

156.- Una vez impuesta la sanción, la empresa TYCO SL se muestra disconforme con la misma y presenta un escrito, sin indicación del órgano al que se dirige, pero en que claramente se muestra una voluntad de recurrir el acto, a pesar de que no lo identifica como recurso. ¿Qué debe hacer la Administración?:

- a) Inadmitir el escrito por los defectos formales de que adolece.
- b) Admitir el escrito y darle trámite de recurso de alzada.
- c) Admitir el escrito y darle trámite de recurso de reposición.
- d) Inadmitir el escrito por no ser susceptible de recurso la resolución en virtud de la cual se impone la sanción, remitiendo al interesado a la jurisdicción contencioso-administrativa.

157.- Sin perjuicio, de la respuesta dada a la pregunta anterior, ¿qué recurso procede contra la resolución sancionadora?:

- a) Recurso de alzada ante el titular de la Consellería, si la resolución procediese del órgano superior de gobierno del IGAPE.
- b) Recurso de reposición.
- c) Recurso de alzada o de reposición, según el órgano que dictase el acuerdo.
- d) Todas las anteriores son falsas.

158.- La Administración, ante el riesgo de impago de la multa finalmente impuesta, decide ejecutar la sanción. No obstante, la empresa TYCO se opone y alega que ha interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a aquella por lo que está suspendida la eficacia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) La eficacia de la sanción se encuentra suspendida, como señala TYCO, por la interposición del recurso contencioso-administrativo.
- b) La resolución es ejecutiva, porque TYCO no ha manifestado la voluntad de recurrir a la Administración previamente.
- c) La resolución es ejecutiva, porque TYCO no ha instado la suspensión en vía contencioso-administrativo.
- d) Todas las anteriores son falsas.

159.- Los hechos objeto de sanción se han puesto en conocimiento de la Administración por parte de TOKY SA, empresa competidora de TYCO SL y afincada en el vecino municipio de Boiro. La empresa TOKY SA reclama a la Xunta de Galicia que le dé traslado de la resolución sancionadora y demás actuaciones del expediente sancionador. ¿Qué debe hacer la Xunta?

- a) Aceptar la solicitud y trasladarle todo el expediente sin más.
- b) Notificar únicamente la resolución sancionadora, en tanto la misma será objeto de publicación en el DOG.
- c) Consultar a TYCO SL y, solo en caso de que aquella no se oponga, trasladar a TOKI SA el expediente.
- d) Denegar, salvo que TOKI acredite un interés en el asunto, la solicitud puesto que la condición de denunciante no confiere, por sí sola, la condición de interesado.

160.- Los datos contables que no se ajustaban a las bases son de fecha 23 de febrero de 2023, y si no se hubiere realizado ningún acto que interrumpa la prescripción ¿Cuándo prescribiría la infracción?

- a) Depende, si se califica como leve a los seis meses, como grave al año y como muy grave a los dos años.
- b) En tanto se trata de una infracción muy grave, la infracción no prescribe.
- c) El día 23 de febrero de 2027.
- d) El día 23 de febrero de 2026.

**PREGUNTAS DE RESERVA
(PRIMERA PARTE)**

161.- Conforme a lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, señale qué afirmación es la correcta y se ajusta a la literalidad del precepto:

- a) La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro Ministro en sustitución del separado.
- b) La separación de los Ministros llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro Ministro en sustitución del separado.
- c) La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
- d) La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

162.- Según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente y los demás miembros de la Xunta:

- a) Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- b) Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio del Estado, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, al Parlamento de Galicia.
- c) Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio del Estado, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- d) Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

163.- De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 29/1998, del 13 de julio de la Jurisdicción contencioso-administrativa, la cuantía del recurso contencioso-administrativo, una vez formulados los escritos de demanda y contestación, lo fijará:

- a) El demandante, previa audiencia del demandado.
- b) El demandado, previa audiencia del demandante.
- c) El Juez o Tribunal.
- d) El Secretario judicial.

**PREGUNTAS DE RESERVA
(SEGUNDA PARTE. CONTIDO TEÓRICO)**

164.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y Sector Público autonómico de Galicia, señale cuál de las siguientes no es una competencia de las secretarías generales técnicas:

- a) Velar por la organización, simplificación y racionalización de la actividad administrativa, y proponer las modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar los servicios.
- b) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y de reglamentos de otras consejerías.
- c) Proponerle la persona titular de la consejería la resolución que considere procedente en los asuntos de su competencia cuya tramitación le esté encomendada.
- d) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos de distintas consellerías.

165.- Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, el personal funcionario puede solicitar la prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo:

- a) Con una antelación mínima de tres meses y máxima de seis meses a la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa.
- b) El informe del órgano competente en materia de personal de la Administración pública en la que el solicitante preste servicios se emitirá en un plazo máximo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el informe, proseguirá el procedimiento.
- c) Las solicitudes y sus prórrogas se resolverán de forma motivada. No podrán tomarse en consideración los resultados de la evaluación del desempeño de la persona solicitante o el rendimiento o resultados obtenidos por la misma.
- d) Se concederá, en su caso, por períodos de un año, renovables anualmente a solicitud de la persona interesada presentada con un plazo de antelación mínimo de tres meses y máximo de cuatro meses a la fecha de finalización de la prolongación concedida, hasta el cumplimiento de la edad máxima legalmente establecida.

166.- Según lo previsto en el capítulo II del Título I de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, los planes de actuación y contratos de gestión de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia, se incluyen:

- a) Dentro de las obligaciones específicas de información institucional, organizativa y de planificación.
- b) Dentro de las obligaciones específicas de información sobre las relaciones con la ciudadanía.
- c) Dentro de las obligaciones específicas de información económica, presupuestaria y estadística.
- d) Dentro de la información específica en materia de contratación pública.

167.- Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la prórroga de los contratos:

- a) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
- b) Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
- c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
- d) No podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca para los supuestos de demora en la ejecución de la prestación por el empresario.

168.- De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento que el órgano competente para resolver haya decidido mediante acuerdo motivado:

- a) Deberán practicarse en un plazo no superior a quince días y el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones.
- b) Deberán practicarse en un plazo no superior a diez días y el plazo para resolver el procedimiento no quedará suspendido.
- c) Deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento no quedará suspendido.
- d) Deberán practicarse en un plazo no superior a diez días y el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido cuando se formulen alegaciones por los interesados.

**PREGUNTAS DE RESERVA
(SEGUNDA PARTE. SUPUESTO PRÁCTICO)**

Preguntas relativas al texto 1

169.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia. El artículo 135 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, regula el anuncio de licitación. Teniendo en cuenta los datos expuestos en el supuesto práctico, lo establecido en dicho artículo y que la tramitación no fue sujeta a regulación armonizada, ¿dónde se tendrá que publicar el anuncio de esta licitación?:

- a) En el perfil de contratante, exclusivamente.
- b) En el perfil de contratante y en el Diario oficial de la Unión Europea, si así lo considera conveniente el órgano de contratación.
- c) En el perfil de contratante, en el Boletín oficial del Estado y en el Diario oficial de Galicia.
- d) En el perfil de contratante, en el Diario oficial de Galicia, en el Boletín oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea.

170.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia. El supuesto fija un plazo de garantía de 12 meses, según el artículo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, el director facultativo de las obras redactará un informe sobre el estado de las obras en el siguiente plazo:

- a) Dentro de los quince días posteriores al cumplimiento del plazo de garantía.
- b) Dentro de los veinte días posteriores al cumplimiento del plazo de garantía.
- c) Dentro de los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.
- d) Dentro de los veinte días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

171.- Con relación al contrato de la Agencia de Turismo de Galicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, los datos del supuesto, y que las obras no afectan a la estabilidad, seguridad ni estanqueidad, el informe de supervisión del proyecto:

- a) Es preceptivo.
- b) Es facultativo.
- c) El informe de supervisión se realizará tras la aprobación del proyecto.
- d) Todas son correctas.

